



OPINIÓN

¿POR QUÉ DESESTABILIZAR?

Segunda Parte
Por Guillermo Buendía*

Con la apología del discurso derechista de poner al centro de su interés al ciudadano individual se da portazo a la lucha de clases al no verla en la presente disputa política por el poder. Nada de partidos de clase sino organizaciones de la sociedad civil; nada de clases sino mareas rosas o naranjas; nada de polarización política sino mejoras continuas; nada de confrontación sino reconciliación. Desde las tribunas parlamentarias y púlpitos la ideología "dominante" se encuentra en crisis de credibilidad y aceptación ante el surgimiento de una narrativa reivindicatoria de luchas sociales por derechos negados, atropellados o regateados.

Para el proyecto neoliberal -donde la prioridad se otorga a la inversión extranjera- la estabilidad política es imprescindible en función de la certeza jurídica de largo plazo, con la cual se asegura el lucro ilimitado contenido en los contratos leoninos que dieron lugar al saqueo de recursos naturales (suministro de insumos) y la integración de nuestra economía dependiente a las cadenas productivas globales. En este sentido, la senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz, como precandidata presidencial del FAM, concreta los intereses empresariales representados en la coalición PRI-PAN-PRD.

La influencia política de la concentración de la riqueza en unos cuantos tiene en la defensa del Poder Judicial el instrumento idóneo para sostener el argumento de "elección de Estado" morenista como recurso ju-

rídico, ante el INE-TEPJF, con el cual impugnar la candidatura de Claudia Sheinbaum e incluso la nulidad de los resultados de la elección. No es casual que, el jueves 19, la senadora en funciones defendiera al Poder Judicial en momentos en que el Senado tenía para su análisis, discusión y aprobación la desaparición de 13 fideicomisos destinados a "prestaciones complementarias" de magistrados y jueces (no más de 1760 servidores públicos del más alto nivel del Consejo de la Judicatura Federal reciben beneficios "complementarios" -reconoció la oficial Mayor de la SCJN, Dimpna Gisela Morales- cuyas prestaciones sociales están totalmente cubiertas presupuestalmente cada año), revela cómo este poder de la Unión ha sometido a los otros dos a través de la guerra judicial, y del cual depende la declaratoria de constitucionalidad de la elección presidencial.

Cuando en el centro del conflicto está el proceso sucesorio porque en el presidente de la República dependen los intereses de clase de los "potentados" y conservadores -"la interacción con quien ostenta el poder" (Lorenzo Meyer, op. cit.) es un asunto políticamente fundamental al momento de definir las políticas públicas económicas, fiscales y laborales)- aun cuando la lucha por el poder

se desarrolla bajo el régimen democrático del sistema electoral y de partidos, la guerra sucia siempre se conduce por parámetros desestabilizadores de las relaciones políticas de clase. Así, en la lucha por instaurar gobiernos de derecha en concordancia con los intereses de clase de los "mandones", se ejercerán acciones encubiertas, soterradas, para incidir en el proceso electoral.

La inestabilidad política es un escenario propicio para "solicitar" la intervención extranjera o la presencia militar, como lo planteó el expresidente Calderón Hinojosa desde su escondite de España. Los planes modernos de "reconquista" son precedidos de campañas de miedo que tienen el rol importantísimo de explotar el "hartazgo anti AMLO" y justificar acciones autoritarias frente al "desengaño" y "destrucción" de México. Durante los meses críticos de la pandemia se alentaron manifestaciones tipo "cacerolazo" por escasez y carestía de alimentos y medicinas; o el combate al robo de hidrocarburos por grupos criminales fue acusado de provocar el desabasto de gasolinas en distintos estados del país.

Del catálogo de instrucciones para dar un golpe de Estado blando se han practicado en México las antes mencionadas, incluso el pronunciamiento de "golpe de timón" ante el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Las posturas beligerantes de la derecha mexicana y sus partidos son inocultables, evidentes. La desinformación tiene en las noticias falsas la forma de golpeo mediático y en el discurso de odio el medio para alentar la confrontación anti AMLO. La acción política de la guerra judicial es el instrumento institucional para sabotear la sucesión presidencial.

Sin duda, los próximos meses estarán montándose escenarios muy complejos como conflictivos. Los movimientos sociales no siempre corresponden a los intereses de las élites gobernantes. Unos y otros son distintos y antagónicos, históricamente. En los últimos cuarenta años se fueron acumulando demandas populares aún sometidas como contenidas y reprimidas por el régimen autoritario del PRI-PAN. El lopezobradorismo no es un movimiento espontáneo ni reciente, el cual expresa con claridad que el neoliberalismo nunca fue aceptado por "el pueblo". Gestado en el agotamiento y contradicciones del sistema presidencialista del partido del gobierno, los controles corporativos también fueron insuficientes no porque antes fueron desmantelados por el interés de la tecnocracia priista, sino porque éstos ya eran inútiles para la representación plutocrática de la élite que se había hecho del poder público para realizar grandes negocios privatizadores.

El legado histórico del nacionalismo revolucionario entró a la contienda política con el movimiento cardenista iniciado por la Corriente Democrática, y una década después, referente de las transformaciones de la redistribución de la riqueza (por el bien de todos, primero los pobres) del movimiento lopezobradorista. Hoy, para el proyecto de la derecha, la recuperación del poder -no del gobierno, porque forma parte de éste- se desenvuelve en desestabilizar los márgenes de gobernabilidad de la democracia aun con riesgos de conducir a una crisis política y constitucional.

*guillermobuendia80@gmail.com

En este sentido, la senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz, como precandidata presidencial del FAM, concreta los intereses empresariales representados en la coalición PRI-PAN-PRD.

